

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, once de diciembre de dos mil veintitrés

A23-198

Asunto: **APELACIÓN AUTO.**
Demandante: **FLOR MARIA CEBALLOS ARBELÁEZ**
Demandado: **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA “ESU” y MUNICIPIO DE MEDELLIN**
Radicado No.: **05001-31-05-011-2013-00974-02**
Decisión: **MODIFICA AUTO**

En la fecha indicada, la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados **MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a decidir el recurso de apelación propuesto por el apoderado de la demandante contra el auto que aprobó la liquidación de costas.

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

- Mediante sentencia proferida el 28 de septiembre de 2015 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, tras DECLARAR que entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA –E.S.U. y la señora FLOR MARÍA CEBALLOS ARBELÁEZ existió una vinculación laboral entre el 9 de enero de 2008 y el 30 de abril de 2011 la cual terminó de manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador y que el MUNICIPIO DE MEDELLIN es solidariamente responsable por el pago de las prestaciones derivadas de dicha relación laboral CONDENÓ a las entidades a reconocer* y pagar a la demandante la suma de \$15.550.830 por concepto de: cesantías, vacaciones compensadas, prima de navidad, indemnización por despido injusto y reembolso de los aportes pagados a seguridad social, la sanción moratoria consistente en un día de salario por cada día de retraso en cuantía de \$43.560 diarios a partir del 9 de octubre de 2011, la indexación de vacaciones y la indemnización por despido injusto y las costas del proceso, fijando las agencias en derecho en la suma de \$4.398.866 distribuido en \$2.199.433 para cada uno de los demandados.
- A través de sentencia del 24 de octubre de 2017 el Tribunal Superior de Medellín MODIFICÓ la anterior decisión, en los siguientes términos:

¶
PRIMERO: REVOCA ABSOLUCIÓN y CONDENA a la ESU y al MUNICIPIO DE MEDELLIN a reconocer y pagar a la demandante los siguientes conceptos:¶

- Prima de vacaciones → → → → \$1.395.533¶
- Intereses a las cesantías → → → → \$180.648¶
- Reembolso de aportes a riesgos profesionales→ → \$152.205.¶

¶
SEGUNDO: DECLARA PARCIALMENTE PROBADA LA EXCEPCIÓN de prescripción de las vacaciones y prima de vacaciones causadas con anterioridad al 30 de mayo de 2009 y las demás prestaciones antes del 30 de mayo de 2010, con excepción de las cesantías que no se vieron afectadas de dicho fenómeno.¶

¶
TERCERO: MODIFICA el valor adeudado por los siguientes conceptos:¶

- Por prima de navidad:→ → → → \$1.668.904¶
- Por reembolso de aportes a salud → → \$530.808¶
- Reembolso de aportes a pensión → → \$538.515¶
- Vacaciones → → → → \$1.395.533¶
- Cesantías: → → → → \$4.369.677¶

¶
CUARTO: REVOCA ABSOLUCION y CONDENA a la ESU a REINTEGRAR a la señora **FLOR MARIA CEBALLOS ARBELÁEZ** al cargo que venía desempeñando, en iguales o mejores condiciones, con el consecuente pago de salarios, prestaciones sociales legales y extralegales, así como de los aportes a la seguridad sociales en pensiones tal como fuera deprecado en la demanda, todo ello por el periodo que transcurra entre el 1º de mayo de 2011 y la fecha del reintegro efectivo, siendo la obligación económica a cargo de ambas entidades de manera solidaria.¶

¶
QUINTO: CONDENA a la ESU y al MUNICIPIO DE MEDELLÍN a reconocer a la demandante la suma de **\$2.420.000 por** indemnización del artículo 21 de decreto 3135 de 1968.¶

¶
SEXTO: Se ACLARA que el valor reconocido por concepto de cesantías no debe ser entregado a la demandante, sino que debe ser consignado al Fondo de Cesantías que escoja la trabajadora, al igual que las cesantías que se sigan causando con posterioridad al reintegro.¶

¶
SÉPTIMO: REVOCA y ABSUELVE de la indemnización por despido injusto y la sanción moratoria.¶

- El 29 de noviembre de 2017 el Tribunal emitió sentencia complementaria, adicionando los numerales cuarto y séptimo de la parte resolutive en cuanto a los reajustes de los salarios objeto de reintegro e indexación de las condenas, así:

“**CUARTO: REVOCA ABSOLUCION y CONDENA a la ESU a REINTEGRAR** a la señora **FLOR MARIA CEBALLOS ARBELÁEZ** al cargo que venía desempeñando, en iguales o mejores condiciones, con el consecuente pago de salarios, prestaciones sociales legales y extralegales, así como de los aportes a la seguridad sociales en pensiones tal como fuera deprecado en la demanda, todo ello por el periodo que transcurra entre el 1º de mayo de 2011 y la fecha del reintegro efectivo, siendo la obligación económica a cargo de ambas entidades de manera solidaria. Para liquidar las sumas objeto del reintegro se tienen como salario para cada año los siguientes:¶

2011: → \$1.210.000¶

2012: → \$1.270.500¶

2013: → \$1.314.205¶

2014: → \$1.352.843¶

2015: → \$1.415.885¶

2016: → \$1.525.900¶

2017: → \$1.628.898¶

¶
(...).¶

¶
“**SÉPTIMO: REVOCA y ABSUELVE** de la indemnización por despido injusto y la sanción moratoria y en su lugar se **CONDENA** a las demandadas a indexar cada uno de los valores reconocidos a la demandante tomando para ello el valor del IPC certificado por el DANE entre la fecha de causación de cada una de las condenas y hasta el momento del pago aplicando la siguiente fórmula: *Indexación = Índice final/ Índice inicial x capital – capital*”.¶

- A través de sentencia con radicado 80343 del 20 de octubre de 2021 la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral resolvió NO CASAR la decisión anterior y condenó en costas a la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU fijando las agencias en derecho en la suma de \$8.800.000.
- Mediante auto del 15 de junio de 2022 el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín efectuó la liquidación de las costas, fijando las agencias en derecho en primera instancia en la suma de \$2.199.433 a cargo de cada de una de las demandadas y en sede de casación en la suma de \$8.800.000 a cargo de cada de la ESU.
- Dentro del término oportuno el apoderado de la demandante PROTECCIÓN presentó recurso de reposición y en subsidio apelación.
- El día 31 de julio de 2023 el a quo resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión anterior y concediendo el recurso de apelación propuesto de manera subsidiaria.

2. ARGUMENTOS

2.1. PRESENTADOS POR EL RECURRENTE

Señala que el valor de las agencias en derecho fijadas en primera instancia en la suma de \$2.199.433 a cargo de las entidades demandadas no esta acorde los parámetros fijados el numeral 2.2.1. del Acuerdo N° 1887 de 2003, que dispone que las agencias en derecho debe ser el 25% del valor de las pretensiones de la demanda, por tanto debe tenerse en cuenta que en el caso de autos, el valor de las condenas impuestas asciende a la suma de aproximadamente \$301.736.939, esto teniendo en cuenta que se ordenó pagar \$16.436.194 por prestaciones sociales que fueron cancelados por la ESU a través de resolución 069 del 12 de febrero de 2018, además se condenó al pago de los salarios dejados de percibir desde el 1° de mayo de 2011, los que liquidados hasta marzo de 2022 ascienden a \$214.062.425, más \$71.238.320 por prestaciones sociales dejadas de pagar a la misma fecha, lo que significa que el valor de las agencias en derecho debió ascender a **\$75.434.234** que es el 25% de las pretensiones reconocidas, teniendo en cuenta que fue un proceso que lleva más de 7 años y la labor desempeñada por el apoderado, donde se ha desplegado una defensa técnica adecuada, se asistió a las audiencias, se interpusieron los recursos, etc, resultando desproporcionado el valor de las agencias en derecho fijado por el a quo que equivale al 1.4% de las condenas ordenadas.

2.2. ARGUMENTOS DEL DESPACHO PARA NO REPONER LA DECISIÓN

El a quo estimó que las agencias en derecho fueron fijadas en el numeral quinto de la sentencia de primera instancia se realizó conforme los criterios de tasación establecidos en el Acuerdo 1887 de 2003, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, además teniendo en cuenta el conjunto de las condenas proferidas, la duración del proceso y la actuación de la parte demandante. Además resaltó que toda vez que mediante sentencia de segunda instancia se modificaron algunos factores de las condenas impartidas, pero respecto a las costas, no se dio una orden diferente a la ya establecida en primera instancia y por el contrario se dispuso en el numeral Octavo que *“En los demás aspectos se confirma la decisión de primera instancia.”*, por lo que estimó el a quo que como la orden del superior fue confirmar los referente a las costas ordenadas en primera instancia, no era dable para el juez disponer algo en contrario, por tratarse de una decisión ejecutoriada.

3. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En lo que a las costas del proceso se refiere, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS) no se ocupa de ellas, por lo que al tenor de la directriz que traza el artículo 145 ibídem, es claro que las normas a aplicar son las que contiene el CPC, derogado por el Código General del Proceso.

El artículo 365 ibídem, al referirse al tema, consagra un criterio objetivo para imponerlas, pues en el numeral 1º dice que *“se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación...”*. Por otro lado, en cuanto a la tasación de la condena en costas, el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de radicación de la demanda (18 de agosto de 2013– fl 12 archivo 01 expediente digitalizado), establece que:

“ARTICULO SEGUNDO.- Concepto. Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso, el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, revisión o anulación que haya propuesto, y en los casos especiales previstos en los códigos de procedimiento.

ARTICULO TERCERO.- Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.”

En el numeral 2.1.1., precisó que en los procesos de primera instancia, las costas a favor del trabajador se liquidarían así:

“...Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

(...) PARÁGRAFO: Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”

En el caso de autos se reconocieron unas prestaciones sociales adeudadas a la fecha de terminación del contrato laboral y también se reconoció una obligación de hacer la cual consistía en el reintegro de la señora FLOR MARIA CEBALLOS al cargo que venía desempeñando al momento de su despido con el consecuente pago de salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social entre el momento de despido y el reintegro, por tanto la tasación de las costas corresponde fijarla hasta en un **25%** por las pretensiones reconocidas en la sentencia, las cuales ascienden a **\$16.436.194** como prestaciones sociales, más un incremento de hasta 4 SMLMV por la obligación de hacer consistente en el reintegro.

Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de un proceso ordinario en el cual la demandante tuvo que presentar pruebas que llevaron a la demostración del derecho, que fue un proceso que duró 2 años en primera instancia y 2 años en segunda instancia y casi 4 años en sede de casación, considera la Sala que con fundamento en la norma transcrita, es procedente la condena en costas, por lo que es dable **MODIFICAR** el auto recurrido, debiendo tasarse las agencias en derecho en primera instancia en la suma de **\$6.686.448**, cifra que se obtiene sumando el 25% del valor de las pretensiones reconocidas, es decir, **\$4.109.048**, más un aumento de 4 SMLMV del 2015 fecha de la sentencia, **\$2.577.400** por la obligación de hacer, estando el 50% a cargo de cada una de las demandadas como se indicó en la sentencia de primera instancia, lo que significa que a la ESU le corresponde la suma de **\$3.343.224** y al MUNICIPIO DE MEDELLÍN la suma de **\$3.343.224** a favor de la parte actora.

Sin costas en ésta instancia.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE

PRIMERO: MODIFICA el auto del 15 de junio de 2022 mediante la cual se liquidaron las agencias en derecho dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora **FLOR MARIA CEBALLOS ARBELÁEZ** contra la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA- ESU** y el **MUNICIPIO DE MEDELLÍN**, fijando el valor de las agencias en derecho en primera instancia en la suma de **\$3.343.224** a cargo de la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA- ESU** y **\$3.343.224** a cargo del **MUNICIPIO DE MEDELLÍN** la y a favor de la parte actora, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en ésta instancia.

Lo resuelto se notificará por ESTADOS y se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por ESTADOS No. 213 fijados hoy en la secretaria de este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 12 de diciembre de 2023

Secretario